

Gasto-elecciones, ¿mito genial?

* PAN y PRD,
los más favorecidos



La titubeante capacidad de respuesta política del gobierno federal ante la **estridencia** de la oposición en torno al gasto social-lealtad electoral pareció darle la razón a las quejas. Sin embargo, desde el Pronasol de 1989 se han hecho estudios **técnicos** para demostrar que los programas contra la pobreza **no** han beneficiado al PRI.

Más aún, el estudio *Monitoreo de programas sociales en contextos electorales. Análisis de la vinculación del gasto de programas sociales con las variables electorales*, de Ma. Fernanda Somuano en el 2006, investigadora de El Colegio de México, concluye que “municipios panistas y perredistas reciben **mayores** recursos que municipios priístas”.

En su investigación técnica Somuano pudo **consolidar** datos verificables sobre la relación gasto-elecciones. En el periodo 2002-2004, en el caso de Liconsa, concluyó: “el grado de competencia en el municipio, así como qué partido gobierna en el mismo, **no afecta la distribución de recursos**. En años electorales municipales se destinan **menores** recursos per cápita a los municipios”. “No existe un uso político-electoral del programa Liconsa para los años estimados”.

Respecto a Oportunidades, la investigadora concluyó que “el grado de competencia política en el municipio **no** parece tener efecto sobre la magnitud de los recursos asignados. La identidad del partido en el gobierno municipal **tampoco** parece ser una variable que tiene influencia sobre los recursos”. Eso sí, encontró que “municipios en estados **perredistas reciben mayores recursos que municipios en estados priístas y que municipios en estados panistas**”.

Por su parte, la investigadora Gabriela Pérez Yarahuán, en su estudio *Social development policy, expenditures and electoral incentives in México*, publicado en el 2007 en la revista *Iberofórum*, jerarquiza la importancia de los programas sociales: primero está el Fondo de Infraestructura social Municipal (376 pesos per cápita), luego Oportunidades (283 pesos) y Liconsa (21 pesos). En este sentido, “municipios gobernados por el PRD reciben en promedio **más gastos** per cápita del Fondo y Oportunidades”, pero en promedio esos municipios tienen un “**menor** grado de desarrollo”.

De acuerdo con la investigación en el periodo

1999-2005, Liconsa fue el único programa social que reveló “mayor influencia política” en la distribución de recursos pero por razones de **lealtad** a nivel federal. Peor aún, a nivel municipal se observó un efecto **negativo** por los mecanismos de **blindaje** desarrollados por la Secretaría de Desarrollo Social. De hecho la investigación encontró que “los nuevos **arreglos** institucionales han servido para **limitar la discrecionalidad** del ejecutivo federal en la asignación de los gastos del gobierno”.

Michelle Dion, en una investigación publicada en el 2000 en la revista *Estudios Sociológicos* de El Colegio de México sobre una indagación de programas sociales en el periodo 1988-1994 sobre el Pronasol (ya inexistente), encontró tres puntos decisivos: los recursos del Pronasol se asignaron con base en **criterios políticos**, el programa **no** estuvo dirigido a los estados o regiones más necesitados del país y “**no influyó en los resultados de las elecciones presidenciales de 1994**”. Esta conclusión es importante porque a nivel federal los programas sociales manejados por el PRI y luego por el PAN **no** determinaron preferencias electorales federales.

Otro dato de la investigadora es revelador: “esos gastos **rara vez** consiguen comprar un número considerable de votos”; “los políticos **sí hacen** uso del gasto público para **comprar** votos, pero **no siempre** tienen capacidad para influir en los resultados electorales”. A boca de urna, los electores votan por decisiones propias, no por compromisos con los políticos. Luego del resultado adverso al PRI en las elecciones de 1997 --pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara federal y pérdida del gobierno del DF--, Zedillo emprendió una gira por municipios pobres para **promover** Progresista --sustituto de Pronasol-- pero el resultado en el 2000 fue **negativo** al PRI.

En una investigación sobre los *criterios de asignación para la superación de la pobreza en México*, de John Scott y Erik Bloom, publicado en *Economía Mexicana* de El Colegio de México en el primer semestre de 1997, se acumulan datos sobre el entonces vigente ramo 26 para combatir la pobreza: los cuatro estados más beneficiados fueron Chiapas (4.6 veces de 1988 a 1997), Guerrero (4.7), Oaxaca (3.1) y Veracruz (2.8) tuvieron resultados **irregulares** en materia



electoral: Chiapas fue dos veces ganada por una alianza anti PRI, Guerrero se descompuso hasta pasar al PRD, Oaxaca pasó a manos de otra alianza antipriísta y sólo Veracruz se quedó en poder del PRI.

Y una *Evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el gobierno del DF*, realizado para la Asamblea Legislativa del DF en el 2001, llegó a una conclusión vía una encuesta: “la mayoría de los entrevistados, **51.7%**, opinó que la finalidad de los apoyos que da el gobierno (del DF) es **obtener votos**” y sólo el 30.5 asumió que el objetivo fue atender los **derechos**.

En el DF **tres** programas concentran el 70% del presupuesto de 12.3 millones de pesos: servicios médicos gratuitos (39.7%), pensión alimentaria a adultos mayores (20.1%) y Prepa Sí (6.78%). De ellos sólo el tercero tiene un **efecto** multiplicador de bienestar y nivel social.

Al final, la **polémica** armada por el PAN y el PRD en torno a la relación gasto-elecciones **no** obedeció a una investigación de fondo sobre el principal efecto de la modernización política: **ciudadanización** de la sociedad, pasando de la sociedad del acarreo (sólo **magnificado** en el DF) a la sociedad del voto conciente.